

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
PALMIRA – VALLE

SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA No 001
Once (11) de enero de dos mil veintidós (2022)

1. MOTIVO DE LA DECISIÓN

Proferir sentencia de primera instancia en este trámite de tutela iniciado por el señor ANDRÉS REINEL SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16937027 expedida en Cali, Valle, con dirección de notificaciones en la calle 47 # 28-76 B/ santa Isabel de este municipio, número telefónico 312 612 9619, correo electrónico notificaciones1977@gmail.com, contra la **POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIÓN Y OFICIO.

2. ANTECEDENTES

Refiere el accionante que es miembro de la Policía nacional con más de 20 años de servicio, por tal motivo la normatividad que lo rige en materia pensional y laboral le permite el retiro voluntario después de haber cumplido veinte (20) años o más de trabajo; razón por la cual el día 28 de octubre de 2021, elevó petición de retiro ante la Dirección General de la Policía Nacional, ante lo cual le fueron concedido treinta y ocho días a cargo de vacaciones, tiempo en el que supuestamente se le notificaría la Resolución, sin que ello fue verdad.

Expresa que ya han pasado varios días sin que se le haya expedido la Resolución que resuelve su petición de retiro, siendo ello contradictorio al derecho de petición y a lo contenido en el Decreto 1083 de 2015, por lo que solicita al Despacho se ordene a la accionada que proceda a expedir el Acto Administrativo de retiro, de acuerdo con la petición elevada. De manera subsidiaria, solicita se proceda a expedirle copia de los encargados de realizar el trámite, incluyendo el del director general de la Policía, con el fin de interponer la acciones penales y disciplinarias. Como pruebas allego copia de la solicitud de retiro de fecha 26 de octubre de 2021.



3. DEL TRÁMITE

Mediante Auto Interlocutorio N° 177 del 7 de diciembre de 2021, este Despacho asumió el conocimiento de la presente acción de tutela, ordenándose la notificación del ente accionado –POLICÍA NACIONAL, así como a las entidades vinculadas DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA-DEVAL-, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-SECCIONAL VALLE DEL CAUCA-, MINISTERIO DE DEFENSA Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, corriendo el respectivo traslado, en aras de resguardar el derecho a la contradicción y defensa.

3.1. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

Al llamado, la **PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADSCRITA A LA OFICINA JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** manifiesta que se debe declarar la falta de legitimación en la causa respecto de su representada, ya que no ha adelantado ninguna actuación en detrimento de los derechos fundamentales del accionante.

El **DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DE LA POLICÍA NACIONAL** refirió que a través de comunicación oficial No. GS-2021-057716/APROP-GRUPE-1.10 del 7 de diciembre de 2021, signada por el Jefe Grupo Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, se comunicó al accionante que su nombre fue incluido en un proyecto de acto administrativo de retiro, con 49 funcionarios más, trámite que una vez cumplió la revisión por parte de esa Jefatura, fue remitido a la Asesora Jurídica de la Dirección de Talento Humano, para su verificación y visto bueno. Por lo que una vez este finalizado el proceso de elaboración y firma le será notificado. De otro lado aclara que la elaboración y posterior revisión del acto administrativo surte unas instancias que no contemplan términos específicos.

Reseña que la comunicación fue remitida a los correos electrónicos del accionante **andre.reinel@correo.policia.gov.co** y **andressan1981@hotmail.com** el día 7 de diciembre de 2021. (anexa copia de la comunicación y trazabilidad del correo electrónico). Por lo expuesto solicita se declare improcedente la Acción de tutela y se denieguen las suplicas invocadas.

EL COMANDANTE DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE, comparece al Despacho indicando que el Departamento de Policía Valle no es competente para emitir acto administrativo de resolución de retiro como lo solicita el accionante, ya que ello es competencia exclusiva de la Dirección de la Policía Nacional y la Dirección de Talento Humano. No obstante, por parte del Departamento de Policía Valle, se dio trámite a la solicitud de retiro voluntario interpuesto por el accionante a la Dirección de Talento Humano por competencia, mediante comunicación oficial No. GS-2021-149191-DEVAL con el fin de surtir los trámites correspondientes para expedir el acto administrativo de retiro, el cual deberá estar signado por el Director General. Por las razones antes expuestas solicita se declare la desvinculación de la Acción de Tutela, ante la falta de legitimación en la causa por pasiva.



4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1 Problema Jurídico:

De acuerdo a la situación fáctica, normativa y probatoria que sustenta la acción de tutela que se decide, corresponde a este Despacho determinar su procedencia frente al caso particular y la presunta vulneración de los derechos incoados por el accionante, teniendo en cuenta que durante el trámite, la Policía Nacional resuelve de fondo, de manera clara, definitiva, precisa y congruente la petición elevada por Andrés Reinel Sánchez, relacionada con la aceptación del retiro voluntario de la Institución y, consecuente Acto Administrativo. Situación que fue debidamente notificada al interesado, conforme lo informado por éste¹.

4.2. PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.

4.2.1. De los derechos presuntamente vulnerados.

4.2.1.1 Derecho de petición: Reiteradamente nuestra máxima Corporación de Justicia, en su incesante tarea de desarrollar la norma de normas, ha señalado que el derecho de petición, consagrado en la Carta Política, tiene como elementos esenciales el que las respuestas dadas a los peticionarios sean oportunas y que resuelvan de fondo, de manera clara y precisa a las pretensiones por ellos presentadas, sin que ello implique una decisión favorable a sus intereses. La razón de ser de que las respuestas de dichas peticiones sean comunicadas al peticionario en los términos ya indicados, no es sólo la de conocer el contenido mismo de la comunicación, sino también, con el fin de poder interponer los recursos y acciones del caso. El juez de tutela tiene la obligación de indagar cuál o cuáles son los derechos fundamentales que van a ser protegidos con su decisión, pues la idea del constituyente al crear este mecanismo de defensa judicial, preferente y sumario fue precisamente la protección de los derechos fundamentales y no la creación de un procedimiento paralelo o complementario a los ya existentes en el ordenamiento.

La Corte constitucional al revisar un caso que planteaba una situación similar a la que hoy se decide por esta instancia, en sentencia T- 562 del 27 de julio de 2007. M. P. Dra. Clara Inés Vargas, refiere que el artículo 23 de la Constitución Política, que consagra el derecho fundamental de petición, establece una correlativa obligación por parte de las autoridades de otorgar una respuesta clara, de fondo y oportuna; identificando los componentes elementales del núcleo conceptual de este derecho que protege la Constitución Nacional de 1991, consistentes en “(i) la pronta contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que deberá reunir (ii) los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se entienda que (iii) ha resuelto de fondo y satisfecho la solicitud del petente.” Refiere, además, que la respuesta es suficiente cuando resuelva materialmente la petición y satisface los requerimientos del actor, sin perjuicio de que la respuesta no acoja las pretensiones del peticionario, que es efectiva si la respuesta soluciona el caso puesto en su conocimiento, y es congruente si hay coherencia entre los que se responde y lo

¹ Expediente digital Acción de Tutela. 09Constancia20220111.



pedido, esto es, que la solución a los pedido verse sobre lo preguntado y no sobre tema semejante o relativo al asunto principal de la solicitud, sin que excluya la posibilidad de suministrar información adicional que tenga relación con la petición formulada.

Respecto a la oportunidad en que debe darse la respuesta, o sea el término que tiene la administración para resolver las peticiones que le han formulado, se acude por regla general al artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone 15 días para resolver contados desde su recibo. Norma según la cual, cuando no fuere posible resolver la petición en el plazo mencionado, deberá ponerse en conocimiento este hecho al interesado, expresando los motivos de la demora e indicando a su vez la fecha en que se dará respuesta, la cual debe ser razonable en consideración a la complejidad o dificultad de la solicitud. Igualmente, la Corte ha consolidado la jurisprudencia sobre el derecho de petición en las sentencias T-377 de 2000 y T -1060 de 2001, identificando los componentes conceptuales básicos del derecho así:

*“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y **(x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado**” (T - 562 de 2007). (Subraya el Despacho).*

Concluye la Corte, con la afirmación que el derecho de petición es vulnerado cuando la entidad no resuelve de fondo lo pedido, o cuando no profiere una pronta repuesta, de acuerdo con los términos que directamente fije el legislador.

4.2.2 La carencia de objeto en la acción de tutela.

La acción de tutela, de acuerdo con la doctrina constitucional, está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación. Sin embargo, durante el trámite constitucional pueden presentarse circunstancias que permitan inferir que las vulneraciones o las amenazas invocadas cesaron porque: (i)



se concretó el daño alegado; (ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado; o (iii) se presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo. Tales circunstancias generan la extinción del objeto jurídico de la acción de tutela, por lo que cualquier orden de protección emitida caería en el “vacío”. Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como “*carencia actual de objeto*”, y se ha clasificado en tres categorías generales: (i) el hecho superado, (ii) el daño consumado y (iii) la pérdida de interés en la pretensión².

Con relación al presente caso, el **hecho superado** se configura cuando en el trámite constitucional las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión perseguida a través de la acción de tutela. En estos eventos, la intervención del Juez de tutela carece de sustento y hace improcedente el estudio de fondo. La Corte Constitucional al analizar el tema del hecho superado, en Sentencia T-905 de octubre 24 de 2002, M. P. Dr. Jaime Araujo Rentarúa, dijo:

“Cuando la situación de hecho que dio lugar a la solicitud de amparo constitucional ha desaparecido, la eventual orden de dar, hacer o no hacer que debería impartir el juez, dada la acción u omisión de una autoridad o de un particular en los casos expresamente consagrados en la ley, perdería su razón de ser.

Sobre el tema tratado, en la sentencia T-781/02 dijo esta Corporación:

“la solicitud de protección de amparo constitucional, consagrado en el artículo 86 suprallegal, desarrollado por el decreto 2591 de 1991, consiste en un procedimiento preferente y sumario que pretende la protección cierta, inmediata y eficaz del derecho constitucional fundamental vulnerado o en amenaza de vulneración por parte de la actuación activa o pasiva de una autoridad o de un particular, en los casos estipulados legalmente.

De suerte que la eficacia resultante de la solicitud de amparo constitucional implica que lo ordenado judicialmente sea cumplido de manera inmediata, de tal forma que la autoridad o el particular actúen o cesen en la violación del derecho que fundamentó la tutela, si lo decidido en la sentencia no cumple con su finalidad, la acción de tutela pierde su objetivo y con ello su razón de existencia.

Cuando en el trámite de la solicitud de protección constitucional, el juez compruebe que la situación de hecho que dio lugar a la misma, ya se ha satisfecho, perdería la razón de ser una eventual orden en búsqueda de la defensa del derecho en conflicto, pues es evidente que nos encontraríamos frente a un hecho superado”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción de tutela se consagró como un medio tendiente a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, su prosperidad se concreta en la orden que imparte el juez, a través de la cual se obtiene la protección deprecada, pero si, durante su trámite, como en este caso, desaparece el supuesto de hecho motivo de la petición de protección constitucional, el instrumento de defensa pierde su razón de ser. “*Ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por*

² Sentencia T-703 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.



sustracción de materia.” (Sentencia T-33/94) Sin embargo, el Juez deberá constatar que en efectivamente se haya satisfecho plenamente la pretensión, de lo contrario deberá garantizar la tutela de los derechos deprecados. Una vez verificada la carencia de objeto por hecho superado, el juez podrá abstenerse de impartir orden alguna³.

4.3 CASO CONCRETO

De cara al problema jurídico planteado, advierte este Despacho que, en efecto, tal y como lo informó el accionante, en el transcurso del presente trámite, la Policía Nacional, a través del área encargada, procedió a resolver de fondo, de manera clara, precisa, congruente y definitiva su petición, con la que buscaba se procediera a aceptar la solicitud de retiro del servicio activo a solicitud propio; si ello es así, no es dable pregonarse vulneración a derecho fundamental alguno, en cambio sí, una carencia actual de objeto por hecho superado. Tal y como como se mencionó en el precedente jurisprudencial de esta decisión, el hecho superado se configura cuando la amenaza o vulneración del derecho fundamental invocado cesa por la acción u omisión de la autoridad demandada. En el *sub-judice*, la acción de amparo constitucional tenía como fin lograr que la Policía Nacional, procediera a agotar los trámites administrativos pertinentes a efectos se concediera el retiro del servicio al actor, situación que, como se constató, se dio atendiendo lo manifestado por él, quien afirmó se encuentra disfrutando del mencionado retiro desde el pasado 29 de diciembre de 2021. Por lo tanto, en las circunstancias descritas, procede la declaratoria de un hecho superado, pues se evidencia la satisfacción integral de los derechos fundamentales de los cuales se adujo una vulneración.

4 PARTE RESOLUTIVA:

En virtud de lo expuesto, el **JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PALMIRA, VALLE**, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la *carencia actual de objeto por hecho superado* en la tutela interpuesta por ANDRÉS REINEL SÁNCHEZ contra la POLICÍA NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito, conforme a lo previsto en el Art. 31 del Decreto 2591 de 1.991.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres días siguientes a su notificación, **REMÍTANSE** estas diligencias oportunamente a la Corte

³ Sentencia T-321 de 2016 y T-439 de 2018.



Constitucional para su eventual REVISIÓN conforme a lo previsto en el Art. 31 del Decreto 2591 de 1.991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CAROLINA GARCÍA FERNÁNDEZ
Juez

